

Proceso organizativo, marcos de orientación y contienda política en la minería a gran escala en el Ecuador de la Revolución Ciudadana.

El caso del proyecto Cóndor Mirador*

Por *Eduardo Martínez Torres***

Introducción

Desde finales de la década de los noventa del siglo pasado Latinoamérica ha atravesado por una serie de cambios sociales, políticos y económicos enmarcados en lo que se ha conocido como gobiernos progresistas, tales como el de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Sin embargo, a pesar de estos cambios hay una constante importante que se ha mantenido: la continuidad extractiva sobre los recursos primario-exportadores. Estos gobiernos progresistas han decidido, con diferentes matices, continuar con la extracción de diversos productos de la naturaleza como modalidad de acumulación.

Los actuales gobiernos progresistas no han logrado desprenderse de la lógica de la acumulación vía extractivismo¹, pero sí darle lenguajes y legitimidades distintas, lo que ha producido y acentuado una serie com-

* Artículo recibido en septiembre de 2014.
Artículo aprobado en noviembre de 2014.

** Licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Ciencias Políticas de FLACSO-Ecuador.

1- Por extractivismo entendemos un modo de acumulación constitutivo del sistema-mundo capitalista que se caracteriza por remover grandes volúmenes de recursos

pleja de conflictos sociales y políticos. Las prácticas que han reforzado los actuales gobiernos de izquierda no han estado alejadas de altos niveles de luchas sociales, en donde entran en juego no solo el uso de los territorios y sus productos, sino también sus significados y sentidos construidos socialmente. De esta forma, el extractivismo trae consigo, en su esencia, el componente político, ya que se ha constituido en uno de los objetos centrales de las luchas sociales y de confrontación entre gobiernos y compañías, por un lado, y movimientos y organizaciones sociales, comunitarias, indígenas y ambientales, por el otro.

Una característica fundamental de estos gobiernos progresistas es que han sido anteceditos por amplias y heterogéneas luchas anti-neoliberales y anti-desarrollistas, las cuales les han permitido acceder al poder político del Estado. Paradójicamente, estos gobiernos terminarían aplicando políticas que acentuaron las prácticas extractivas a las que en décadas anteriores se habían opuesto. Lander (2013) afirma que esta paradoja obedece a dos elementos; el primero es la urgencia que tienen estos gobiernos de responder a corto plazo a las demandas y expectativas de los sectores populares, puesto que se enfrentan a una larga historia de gobiernos con un proyecto estatal marcadamente retraído en lo social, en sociedades profundamente desiguales y con un acceso a los derechos básicos bastante limitado para la gran mayoría de la población. De esta forma, el extractivismo se ubica en medio de una amplia cadena de expectativas, necesidades y respuestas ante prioridades de justicia social, legitimidad y apoyo electoral.

El segundo elemento de esta contradicción se explica en la actual fase del sistema-mundo, caracterizado por el acelerado crecimiento de las

naturales que son muy poco o nada procesados y se utilizan principalmente para la exportación (Acosta, 2012: 85). Este ha sido la bisagra de los procesos de colonización desde la conquista y colonización de América y África y de las fases históricas de la división mundial del trabajo.

economías emergentes, principalmente la china, lo cual produce un aumento en la demanda de productos primarios. Ante esto, los gobiernos responden nacionalizando compañías multinacionales, aumentando la participación en las ganancias fiscales sobre estas actividades y aumentando el volumen de la exportación/producción (Lander, 2013).

Un tercer elemento de igual relevancia sería el contexto macro de este tipo de conflictos. Maristela Svampa, (2013) denomina como Consenso de los “Commodities”. Este contexto macro del sistema-mundo, en donde se insertan los conflictos y contiendas políticas mineras a gran escala se entenderían como una nueva forma de inserción de América Latina a un orden político-ideológico y económico en donde “el modelo de acumulación intensificaría megaproyectos tendientes al control, la extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado... sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes” (Svampa, 2013:31). Esta profundización de modelo de acumulación centrado en la exportación y explotación de materias primas (productos alimenticios, hidrocarburos, metales y minerales), trae consigo y de forma constitutiva formas asimétricas de poder, conflictos y luchas sociales, así como, profundización y a la vez nuevas formas de desposesión de tierras, recursos y territorios (Svampa, 2013).

En este mismo sentido, Acosta (2011) plantea que los gobiernos progresistas buscan reubicarse en el mercado mundial con relación a las demandas de capitales metropolitanos. Esto explicaría que en la última década del siglo XX, buscando seguir el modelo de países como Chile y Perú, se iniciaran procesos de exploración y explotación minera a gran escala en países como Colombia o Ecuador, que anteriormente no habían tenido un modelo de desarrollo económico sustentado en la extracción de recursos mineros a gran escala. Además, según Toro Pérez (2012), si bien Los Andes se han caracterizado por grandes concentraciones de minerales, lo que ha atraído a las empresas mineras transnacionales son las condiciones favorables y excepcionales que para esta

actividad establecen las legislaciones y marcos institucionales (Svampa, M. Buttaró, L y Sola Álvarez: 2009) y (Sacher, 2015).

El caso de Ecuador con la Revolución Ciudadana ha sido uno de los más nombrados por las izquierdas, pero también por la academia. Su importancia no ha sido en vano: el proceso social, político y económico que ha acontecido en Ecuador desde el 2005, y que fue antecedido por el movimiento indígena y su posterior desgaste, es resultado del deterioro del proyecto político y social del neoliberalismo y de un desajuste entre elementos institucionales y distintos aspectos ideológicos (Ramírez, 2007). Sin embargo, para el propósito de este artículo, su relevancia radica en la paradoja de pertenecer a estos gobiernos progresistas y, al mismo tiempo, estar profundizando una política extractiva centrada principalmente en recursos hidrocarburíferos y minería metálica a gran escala. Durante el gobierno Correa, esta continuidad y profundización del extractivismo ha hecho que las discusiones alrededor de este tipo de políticas y del modelo de desarrollo económico que se promueve desde el gobierno central estén en el centro del debate político y académico, pero fundamentalmente en el de la conflictividad y la lucha social.

Este texto busca describir y explicar, a partir de los *marcos de orientación colectiva*² y la propuesta analítica de *contienda política*³ de McAdam, Ta-

-
2. Se entiende por marcos de orientación colectiva como un conjunto de procesos y esfuerzos conscientes y estratégicos de un grupo o colectivo de personas con el fin de construir interpretaciones, significaciones y sentidos del mundo y de sí mismos y que tienen la característica de ser compartidos. La construcción de estos elementos permite construir mecanismos de legitimidad y motivan las acciones del movimiento. Estos procesos colectivos y estratégicos de los actores y sociales y políticos se componen de la construcción de un problema, atribución de responsabilidades, planteamiento de soluciones y dinámica con otros actores movilizados, y actores oficiales e institucionales que disputan en la escena pública el sentido y orientación de un campo social particular. Las orientaciones de actores y sujetos sociales y políticos fundamentan las prácticas y acciones colectivas

rrow y Tilly (2005), un caso de contienda política en torno a la minería metálica a gran escala durante la Revolución Ciudadana en Ecuador: el proyecto Cónдор Mirador. Este proyecto de megaminería de cobre, considerado uno de los cinco proyectos estratégicos del gobierno ecuatoriano, está ubicado en la parroquia Tundayme y el Güisme, cantón el Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, Cordillera del Cónдор, en la frontera con Perú. Fue firmado el 5 de marzo del 2012 y concesionado a la compañía Ecuacorriente Resources, que implantó el proyecto de minería a cielo abierto (Kuhn, 2011; Garbay Mancheno, 2011). En la zona en la cual se encuentra ubicado existen varias áreas protegidas que se caracterizan por contar con nacimientos de agua y una alta biodiversidad.

Para lograr este objetivo, se reconstruyó el proceso organizativo y de lucha alrededor del proyecto, observando sus características y elementos principales, los mecanismos que intervinieron, las tensiones que se presentaron a nivel local y entre distintos sectores, lo que estaba en juego para los diversos actores y organizaciones locales y regionales, así como sus estrategias y las del gobierno central de Correa. Es importante aclarar que todos estos elementos solo adquieren relevancia desde el contexto político y socioeconómico en el que se inscribe el conflicto. En un primer momento se esboza la perspectiva desde donde se asumen los conflictos mineros a gran escala, resaltando las tensiones que generan desde su inicio y la dimensión política que implican. Más adelante se

trasgresoras, violentas y disruptivas de la contienda política (Tarrow, 2004), (Klandermans, 1988) y (Benford y Hunt, 1992).

3. Se entiende por contienda política a una interacción episódica y pública, en donde distintos actores y sujetos sociales y políticos disputan un objeto, u objetos que afectan intereses y más ampliamente condiciones de vida de una amplia porción de población. Esta interacción se caracteriza por la presencia de relaciones de oposición y polarización, formación de identidades y fundamentalmente acciones colectivas contenciosas y disruptivas que se concertan para crear desafío, incertidumbre y solidaridad de otros sectores de la sociedad (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005).

plantea la continuidad extractiva, que va desde el proyecto neoliberal del Ecuador en los noventa hasta la Revolución Ciudadana de Correa. Seguidamente, se reconstruye y analiza el proceso organizativo local y regional en torno al proyecto Cónдор Mirador, dando especial énfasis a los diversos actores que participan en él, lo que estaría en juego para cada uno, sus estrategias de orientación, mecanismo intervinientes y los cambios que se han dado según el momento del conflicto. Por último, se analiza la producción de unas tecnologías de significación como forma de orientación gubernamental y se finaliza con una síntesis de lo expuesto.

Minería a gran escala: ¿conflicto socioambiental o contienda política?

El extractivismo, entendido como medio de acumulación de un sistema socio-económico, distintos sectores políticos, económicos y sociales, oficiales y privados, el conflicto se torna en su forma más política, y en este sentido, se expresan formas de dominación, consenso, disputas, cooperación y decisiones con relación a qué producir, cómo distribuir el excedente y a qué fines destinarlo (Alimonda, 2012). Conflicto político, en donde se disputaría la ampliación, profundización, reestructuración y/o alternativa del modelo de desarrollo y acumulación.

Una de las principales expresiones del extractivismo ha sido la minería metálica a gran escala, que económicamente se caracteriza por sus pocos encadenamientos productivos y socio ambientalmente, por su impacto negativo, el cual se ve, entre otros, en el despojo de tierras, el uso masivo de aguas y los conflictos por el acceso y uso de esta y otros bienes comunes. Además, al finalizar el proceso de extracción y producción del material, se desechan materiales con altos niveles de contaminación, lo cual genera costos que no son tomados en cuenta en la producción minera (Delgado Ramos, 2010). Estos efectos hacen que los proyectos extractivos y mineros a gran escala hacen que la política adquiera gran expresión y se convierta en un aspecto fundamental de los procesos y dinámicas políticas en una sociedad, es decir, el extracti-

vismo como forma de acumulación genera disputas alrededor de la naturaleza y los territorios, se tejen distintas relaciones de poder en términos de apropiación y control por parte de diversos actores sociopolíticos en distintas escalas, grados de legitimidad, de colaboración o conflicto.

Para el propósito de este artículo es importante considerar la definición de política presente en la propuesta de Wolin (1974), quien señala al sistema de instituciones de una sociedad que definen el ordenamiento de poder y autoridad, es decir, la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad. En donde estas decisiones afectarán intereses y objetivos de otros y cuando estas acciones adquieren forma de organizaciones e instituciones se torna política (Wolin, 1974: 16).

Para referirnos al extractivismo, y más exactamente a los proyectos de minería metálica a gran escala, la política es asumida en términos extensivos. En este sentido, Lefwich (1987) afirma que

la política no es un ámbito separado de la vida y actividad pública, por el contrario abarca todas las actividades de cooperación y conflicto, dentro y entre sociedades, *por medio de las cuales las sociedades humanas organizan el uso, la producción y distribución de los recursos humanos, naturales y otros*⁴. (p.123).

A partir de esto, y para explicar la dinámica del conflicto alrededor de proyectos de minería metálica a gran escala, se hace fundamental entender las iniciativas megaminerías desde las interacciones entre actores, el juego y contexto político y socioeconómico, y observar los tipos de relaciones de los actores que desafían o cuestionan una política gubernamental y el entorno político. Lo anterior sitúa al extractivismo y la megaminería como uno de los elementos que representa una parte fundamental de la conflictividad social y que se lleva más atención en

4. La cursiva es de mi autoría con el objetivo de resaltar los aspectos de cooperación y conflicto en torno al uso, organización, producción y distribución de recursos no solo humanos sino naturales como fundamento y objeto de la política.

los debates públicos, puesto que es este donde se disputan las propias condiciones de existencia y reproducción de las sociedades, más allá de los recursos y externalidades. Todo esto recalca la dimensión política de los conflictos mineros y el extractivismo, la cual ha sido olvidada o dejada en un segundo plano por parte de los estudios socioambientales.

Lo que está en juego alrededor de este tipo de conflictos tiene profundos impactos políticos y estructurales, dado que la mentalidad y práctica extractiva y de minería a gran escala implica ocupaciones extensivas y transformaciones sobre los territorios. Su carácter estructural alude a que las instituciones y gobiernos buscan imponer o consensuar un modelo de desarrollo económico al que los movimientos y organizaciones sociales y populares tienden a oponerse y cuestionar, lo cual termina por afectar la calidad misma de la democracia (Brito Díaz, 2012).

Una vez planteada la dimensión política y estructural esencial del extractivismo y los proyectos mineros a gran escala, se hace importante mencionar que en América Latina, fundamentalmente, la actividad minera se superpone con disputas históricas por la expropiación de recursos que constituyen una matriz esencial de las formas de vida de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, lo cual se traduce en una lucha de estas por el agua, la tierra y la autonomía alimentaria. Así, las actividades mineras a gran escala se convierten en un motor de conflictos en regiones rurales olvidadas por los Estados o con debilidad institucional y exclusión social.

Ecuador: de un escenario liberalizado a un progresismo extractivo

Sacher y Acosta (2012) plantean que, como condición para otorgar préstamos, el Banco Mundial exigía al Estado ecuatoriano elaborar una normatividad minera bajo ciertas directrices: regularización de la minería informal, flexibilización en la normatividad laboral y ambiental, garantías prioritarias en acceso a territorios y reducción de aranceles y

tributos estatales. Todo un conjunto de exenciones y privilegios para la inversión de capitales en los proyectos mineros a gran escala que se comenzó a aplicar en 1991 con la Ley 126 de Minería, que después fue reformada por la Ley Trole II del 2000. Esta reforma permitió cristalizar un proyecto claro de apertura a las inversiones extranjeras y supresión de pagos de regalías al Estado. Estos dos autores afirman que para el 2008, antes del Mandato Minero, las áreas concesionadas sumaron un total del 20% del territorio ecuatoriano, incluyendo zonas protegidas, territorios indígenas, tierras agrícolas y zonas de conservación arqueológica.

La etapa neoliberal⁵ se caracterizó por promover el ingreso de empresas mineras extranjeras que tenían intereses en la ejecución de proyectos de exploración y explotación o la ampliación de otros que ya existían, pero sin definir agendas sociales y ambientales acordes a los impactos en las relaciones sociales y los ecosistemas locales y regionales (Sacher y Acosta, 2012). En esta fase sobresale la necesidad del Estado y de los gobiernos por alcanzar un desarrollo económico caracterizado por un rápido crecimiento del PIB condicionado y dependiente de las inversiones extranjeras. Sin embargo, en Ecuador este proceso de liberalización fue matizado y en gran medida impedido por resistencias, movilizaciones, bloqueos y la oposición de partidos y otros actores políticos y sociales.

Es importante resaltar el proceso de continuidad en el que viene Ecuador desde la década de los noventa, con una marcada política neoliberal extractiva, hasta una fase de progresismo extractivo bajo el ropaje de la Revolución Ciudadana, en donde la política extractiva y los

5. Entiéndase por etapa neoliberal por orden político, económico, social e ideológico anclado en unos principios del Estado mínimo, deslegitimación de lo público y colectivo, buscando la ampliación y reconfiguración del mercado como principios que dirigen el orden en una sociedad. Esta etapa en América Latina se inicia a finales de los ochenta con procesos de liberalización económica y comercial, para llegar a un proceso de transformación y reconfiguración desde mediados de la década pasada.

discursos y lenguajes desarrollistas se constituirían en uno de los ejes fundamentales de este proyecto político.

Para entender mejor esta situación, se hace necesario comprender esta continuidad en referencia a una izquierda moderada y cristiana dentro de lo que se ha llamado socialismo del siglo XXI. La izquierda de Correa se ha interpretado como un proyecto modernizador que busca adecuar el Estado al capitalismo contemporáneo (Acosta, 2013). El proyecto político de la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por su ambigüedad, pues promulga una modificación de la estructura económica, es decir, saltar de la economía primario-exportadora a una economía de diversificación productiva y exportación de bienes primarios (Unda, 2013), pero, paradójicamente, refuerza las políticas extractivas sobre los recursos de la naturaleza: Ecuador está ante una continuidad que no cuestiona ni toca el modelo de acumulación capitalista⁶. Esta continuidad está enmarcada, fundamentalmente, en la crisis del sistema político y de la representatividad política de los partidos tradicionales, así como en un quiebre en el modelo de desarrollo basado en los principios neoliberales.

Heterogeneidad de actores e intereses: elementos condicionantes del conflicto

Para comprender el conflicto que se gesta alrededor del proyecto Cóndor Mirador es importante mencionar que este fue antecedido por otras disputas locales: los procesos de colonización por parte de comunida-

6. Respecto a esta continuidad Correa mismo dice: “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación antes que cambiar, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (citado en Martínez, 2013, 175) Además, la ambigüedad de su izquierda se plasma en la definición del proyecto político de su gobierno y de Alianza País: “No somos anticapitalistas, no somos antiyanquis, no somos antiimperialistas, somos projusticia social, prodignidad, prosoberanía” (citado en: Martínez, 2013, 175).

des religiosas, el conflicto binacional entre Perú y Ecuador, la pugna entre los Shuar y el Estado por la imposición de un modelo de desarrollo y las peleas entre los mestizos y los Shuar. Además, se articula con disputas que iniciaron en la década de los ochenta del siglo pasado resultado de los primeros cambios en la agricultura por la incursión de la explotación de oro a pequeña y mediana escala; factor que afectó la forma de vida de los Shuar (Garbay Mancheno, 2011) y (Kunh, 2011).

La resistencia antiminera que se conforma alrededor de este proyecto aparece en un contexto político y socioeconómico caracterizado por dos elementos: la incorporación del movimiento indígena a la arena política institucional en el 2003 y la contundente crisis de legitimidad del sistema político, que adquirió su principal expresión en el 2005. Este último factor permitió la emergencia y consolidación de un liderazgo de vocación transformacional (Ramírez, 2010). Además, en el ámbito socioeconómico se inicia un proceso que Acosta (2013) y Unda (2013) han denominado como modernización del Estado, lo cual se traduce en un proceso de racionalización y adaptación del Estado ecuatoriano a las nuevas dinámicas del capitalismo mundial. Para este proceso fueron fundamentales la ampliación de la frontera petrolera y la incursión de proyectos mineros a gran escala, lo cual da cuenta del proyecto Mirador como una muestra de esta inserción al sistema capitalista mundial.

Entre el 2000 y el 2006 en el sur de la Amazonia ecuatoriana se da un incremento de la conflictividad social por el inicio de trabajos de exploración minera, a la par que se desarrollan labores de sensibilización y socialización por parte de organizaciones que buscan definir esta nueva realidad como problemática⁷ (Santillana y Latorre, 2009). En

7. Sin embargo, desde 1992 en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en la zona sur del Ecuador, ya existían algunos antecedentes de conflictos protagonizados por grupos campesinos que se preocupaban por el deterioro del agua a causa de procesos de prospección, pero esta problemática no persistió ni adquirió otros niveles

estos primeros momentos fue importante el papel de la organización Coordinadora Campesina Popular⁸, que tuvo su zona de influencia en provincias como el Azuay y Morona Santiago, en las que se dedicó a tareas de sensibilización ante los proyectos de megaestructuras como la construcción de la hidroeléctrica de Hidroabánico. Esta organización, principalmente regional, inicia procesos comunitarios y de investigación sobre el tema de grandes inversiones extractivas buscando construir mecanismos que alteraran las percepciones individuales y colectivas de las poblaciones locales que se vieron afectadas directamente por estos proyectos.

La primera etapa del conflicto minero se desarrolla entre 2000 al 2006. Esta primera etapa se caracterizaría por su etapa latente, en donde no se presenta la formación de identidades, ni tampoco procesos organizativos ni polarización abierta o escala nacional. En este contexto surge el conflicto por la llegada a la zona de la empresa canadiense Corriente Resources⁹ y su proyecto Cóndor Mirador. Este conflicto ha sido protagonizado por diferentes actores, cada uno con sus distintas posiciones e intereses en juego.

-
8. La Coordinadora Campesina Popular es una organización conformada entre el 2004 y el 2005 principalmente por sectores campesinos y suburbanos, con un fuerte componente ideológico y político anticapitalista, antiimperialista y de clase en defensa de la soberanía y los ecosistemas. Organizativamente se ha caracterizado por el centralismo democrático (Santillana y Latorre, 2009).
 9. Corriente Resources Inc. es una empresa creada en la provincia de Colombia Británica-Canadá en 1983 bajo el nombre de “Coronado Resources Inc.” En 1990 cambió su nombre a “Iron King Mines Inc.” y, finalmente, en 1992 pasó a llamarse “Corriente Resources Inc.”. Es una empresa Junior, es decir, dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos mineros principalmente en América Latina. Actualmente Corriente Resources ha operado en Ecuador mediante las siguientes subsidiarias: Ecuacorriente S.A.; Explorcobres S.A., Puertocobre S.A (Sacher y Acosta, 2012, p.61). Para el 2010 el 96 % de las acciones de Corriente Resource fue comprada por la empresa estatal china Tonglin Nonferrous y China Railway. Responsables de la explotación de las concesiones.

La población de la parroquia de Tudayme, que es la principal afectada por el proyecto megaminero de cobre, en su gran mayoría recibió positivamente el proyecto minero a gran escala de la empresa canadiense, puesto que esta logró anclarse en la comunidad aprovechando sus altos niveles de pobreza y la poca o nula inversión del Estado en salud y educación. Además, Corriente Resources potencio una serie de experiencias a través de promesas de trabajo, la posibilidad de comercializar y surtir a la empresa con productos locales y la inversión en proyectos productivos para las comunidades (Brito Díaz, 2012).

La empresa se presentó como agente de desarrollo local y, por medio de una serie de campañas públicas, logró posicionar benéficamente el proyecto en gran parte de la población, obteniendo así ‘pase social’ a nivel local. Esto conllevó una importante división entre quienes se fueron de parte de la compañía y el proyecto y quienes preferían mantener una distancia de este o lo rechazaban. De esta división fueron objeto tanto la población campesina-mestiza como la población Shuar. La campaña publicitaria de Corriente Resources logró que una parte de la población trabajara para la empresa, lo cual separó aún más a la población. Cabe resaltar que la división en la población por la llegada de la empresa se sobrepuso a una conflictividad de larga data entre comunidades Shuar y mestizos fundamentalmente por el control de la tierra.

La división entre campesinos-mestizos y los Shuar, así como al interior de cada sector, se explica, en gran parte, por lo que podría estar en juego para cada uno en el momento en que la compañía minera llega con el proyecto y establece las primeras y distintas formas de acercamiento con la comunidad.

Los actores del conflicto en torno al proyecto Mirador se definen por su diversidad de intereses y por lo que está en juego para cada uno. Así, el sector que está a favor del proyecto ve en este la posibilidad de adquirir mejores condiciones de vida, es decir, el proyecto representa para ellos una vía de desarrollo, progreso y bienestar mediante el cual

el territorio adquiere un valor como medio para alcanzar estas condiciones a través de la explotación de sus riquezas. Tanto los Shuar como los campesinos-mestizos están vinculados laboral y comercialmente con la empresa y han perdido sus formas tradicionales de vinculación social y cultural con el territorio y su comunidad. De este modo, los que han perdido, vendido o comercializado terrenos adquieren una mayor disposición y apertura al proyecto, dado que este representaría algún sustento económico. Para ellos están en juego los medios para mejorar materialmente sus formas de vida.

Por otro lado, para los sectores Shuar y campesino-mestizo que ejercen una importante oposición al proyecto minero a gran escala, y que no se reconocen ni identifican con el proyecto de la compañía y del Gobierno, lo que está en juego con la llegada de la compañía minera y el proyecto es la continuidad de sus condiciones de vida material, social y cultural: básicamente el control y definición sobre su territorio y sus recursos de forma autónoma y propia; es decir, la posibilidad de decidir sobre los vínculos que aún conservan con su territorio y la oportunidad de seguir definiendo el control y uso de este, así como de sus condiciones de vida.

Entre el 2000 y el 2006 a nivel local existía un conflicto latente¹⁰, es decir, territorio como medio de continuidad social, cultural y de vida o medio para mejorar condiciones económicas y materiales.

Otro aspecto característico de esta contienda política provocada por el proyecto minero a gran escala es que, a causa de la división entre campesinos, comunidad Shuar y las personas que se vincularon laboralmente con la compañía minera, en la zona de afectación no se logró llegar a lo

10. Este tiene la característica inicial de afectar a una parte relevante de la población y estar atravesado de intereses latentes a partir de las atribuciones de lo que estaría en juego para cada sector(Dahrendorf, 1966).

que Klandermans (1988) llama *formación de consenso*¹¹. Los resultados de la resistencia antiminera regional y nacional dependieron en gran medida de las dinámicas de la población local que se vio inicialmente afectada. Esta, como pudo verse, estuvo caracterizada y condicionada por grupos e intereses heterogéneos, dinámicos y en gran parte contradictorios.

En la población de Tundayme no se puede afirmar que haya existido un agravio extendido ni la construcción de una indignación común contra la empresa minera Ecuacorriente. Tampoco se puede hablar de algún acuerdo que busque una transformación del proyecto minero ni mucho menos su nulidad. Por el contrario, como se mencionó anteriormente, una parte considerable de la población que está afectada directamente por el proyecto Mirador decidió apoyarlo debido a que la empresa se mostró como un agente capaz de cambiar positivamente las condiciones económicas y sociales de la población, a cambio de dar el famoso ‘pase social’ al proyecto. Adicionalmente la empresa, asociada con el Gobierno y las autoridades locales, llevó a cabo una estrategia de división y cooptación de líderes comunales.

Este apoyo al proyecto por parte de un gran sector de la población de la Parroquia de Tundayme se tradujo, entre el 2006 y el 2007, en no permitir entrar una serie de movilizaciones en oposición a la firma del contrato minero entre la empresa y el Gobierno. La población de Tun-

11. En cuanto a la formación de consenso de los actores sociales y políticos movilizados Klandermans (1988) plantea la necesidad de distinguir entre formación de consenso y movilización de consenso. La primera sería producto de la convergencia espontánea de significados en las redes, en las cooperaciones sociales que crean definiciones colectivas de los objetos de disputa, de los causantes y/o responsables. Es decir, producir definiciones colectivas sobre una situación, pero sin realizar movilizaciones colectivas ni guías sobre el camino a seguir. Para esto, Klandermans plantea que el momento de la movilización de consenso se refiere a los “intentos deliberados de difundir los puntos de vista de un determinado actor social en una población” (p.175).

dayme en su gran mayoría fue y ha sido permeada por el discurso de desarrollo y progreso que producen y enuncian las dos empresas que han estado presentes en el proyecto Cóndor Mirador y el gobierno de Rafael Correa. Esto permitió que la población tuviera, si no una importante recepción, por lo menos sí una pasividad relevante que posibilitó un terreno más favorable para que se lograra firmar el contrato minero entre el Gobierno de Rafael Correa y la Ecuacorriente en el 2012.

En cuanto al proceso organizativo, una característica condicionante de esta contienda política es que la oposición y organización antiminera a gran escala no se gestó desde el propio lugar de incidencia del proyecto Mirador, sino que tuvo una conformación más exógena, es decir que desde afuera de la población afectada se buscó incidir en el interior de esta. Esta característica sería un factor condicionante para el proceso organizativo y la oposición externa antiminera que buscó incidir en una población local bastante dividida frente al proyecto minero, por los efectos que este representa, por significados diversos sobre el territorio junto con las experiencias de colonización en la Amazonia ecuatoriana.

Marcos interpretativos y mecanismos intervinientes en el proyecto Cóndor Mirador

Para finales del 2006 en el cantón El Pangui y Gualaquiza, en la Provincia de Zamora, un amplio sector de la población empieza a inquietarse sobre los proyectos que están corriendo en la zona, incluyendo el Cóndor Mirador. En este sentido, parte de la población y los líderes locales inician un proceso de búsqueda de información y respuestas y comienzan a relacionar su situación con la de otras provincias que experimentan procesos parecidos, como el proyecto de Quinsacocha, en Azuay, o la construcción de la Hidroabánico. Estos proyectos llevaron a la conformación de una serie de procesos organizativos, principalmente de carácter campesino, que realizaron trabajos de sensibilización y talleres en estas poblaciones.

Como resultado de la búsqueda de información y asesoramiento, la población de El Pangui identifica problemas, descontentos e injusticias iniciales y entre el 2007 y el 2008 se lleva a cabo un proceso de movilización. El proceso organizativo en esta población comienza a ser dirigido por organizaciones que ya tenían procesos anteriores y una posición política e ideológica clara sobre la minería a gran escala.

Se realizan entonces amplias y numerosas reuniones que les permiten conocer las dimensiones del proyecto minero y logran así construir una formación de consenso sobre el problema. Para esto fue relevante el conocimiento de otros casos y experiencias en Latinoamérica, como los de Perú, Chile, Colombia y Argentina, así como la realización de encuentros y viajes dirigidos por organizaciones ecologistas y ambientalistas, que se sumaron a las inquietudes de poblaciones afectadas indirectamente por el proyecto. Estos elementos permitieron construir y delimitar el problema ante unos agravios y unas prácticas por parte de la empresa Corriente Resources y el Gobierno central: la no difusión clara y exacta del proyecto por parte de la empresa, la ausencia de consulta previa y la falta de claridad respecto a los distintos efectos que puede tener el proyecto sobre la naturaleza y la población tanto a nivel social como económico.

Como resultado de este proceso llevado a cabo en los cantones de Gualaquiza y el Pangui, entre finales del 2006 y principios del 2009 se dio una primera etapa de conflictividad que llevó a un fuerte enfrentamiento entre estas poblaciones, indirectamente afectadas por el proyecto Cóndor Mirador, y la población de la Parroquia rural de Tundayme. Ya que gracias a los talleres, procesos de sensibilización, reuniones, contactos y redes regionales e internacionales estas poblaciones habían realizado un ejercicio de resignificación del problema, pretendían que este proceso también se realizara en la Parroquia de Tundayme, pero no fue posible debido a las contradicciones de la población misma, la capacidad de injerencia y maniobra de la empresa y sus estrategias de división y cooptación. Por el contrario, en esta población se dio un

proceso de respaldo a la empresa que cristalizó en la defensa a capa y espada del proyecto ante la llegada de la población movilizada desde los cantones de Gualaquiza y El Pangui hacia los límites provinciales de Zamora y Morona, en el río Zamora.

Para la construcción y delimitación del problema en los cantones de El Pangui y Gualaquiza fueron importantes tres mecanismos que actuaron en este proceso inicial: *corretaje*, *apropiación social* y *formación de categorías* (Mc Adam, Tilly y Tarrow, 2005). El corretaje local permitió vincular distintos sectores sociales entre sí, campesinos y mestizos que tenían inquietudes semejantes sobre lo que iba a pasar con sus territorios, sus viviendas y sus formas de vida; identificar intereses en juego compartidos colectivamente; reforzar y crear nuevos lazos entre sectores sociales a través de distintas actividades; la emergencia de una fuerte apropiación social sobre el problema; y una primera identificación sobre lo que está en juego: el territorio y la estabilidad de la población local. La formación de una apropiación social sobre el problema y lo que está en juego permitió, por su parte, conformar una base social relevante de apoyo y un importante recurso organizativo que hizo posible las movilizaciones del 2007 al 2009. Finalmente, la formación de categoría, pero más exactamente la formación de identidad junto con la apropiación social, permitió que localmente se construyera un “nosotros” (comunidad local) y un “ellos” (compañía minera).

Para finales del 2009 en los cantones El Pangui y Gualaquiza se identifica un problema, es decir, un conflicto objetivo y manifiesto, se conforman unas relaciones sociales alrededor del problema identificado por la comunidad. Esto acompañado de la construcción consciente de intereses manifiestos. En esta etapa el conflicto adquiere concreción visible con la creación de identidades visibles, e inician procesos de articulación con otros conflictos.

Este proceso que se inicia a finales del 2005 adquiere gran relevancia y conflictividad en el 2009 cuando toma mayor importancia resultado lo

que se estaría disputando en el conflicto. Como bien señala Dahrendorf (1966), a mayor importancia a lo que está en juego, mayor intensidad del conflicto. Esta última depende de la atribución en lo que se estaría luchando, caracterizándose por su gran importancia y peso social, y como tal, reflejándose en gran intensidad.

Hasta ahora se ha intentado mostrar lo que Gerheards (1993) ha llamado estrategias de orientación, que se entenderían como la construcción de un problema social en la que son necesarios procesos organizativos y de lucha social. Además, se mencionaron mecanismos intervinientes que localmente buscaron propiciar espacios de debate público con el objetivo de identificar causas y agentes del problema y, así, atribuirle otros significados a la realidad local.

Por otro lado, es necesario explicar el proceso de (re)significación construido y atribuido a lo que estaría en juego: la disputa de actores y organizaciones locales que se oponen al proyecto megaminero, junto con estrategias para aglutinar sectores amplios de la población a través de mecanismos (movilizaciones, plantones, protestas, bloqueos, comunicados públicos) para abrir la discusión pública en torno al proyecto minero Cónдор Mirador y ampliar así el campo de incidencia política.

Por otro lado, se observan dos procesos de orientación: el de las comunidades Shuar y el de los sectores campesinos-mestizos. Estos actores se diferencian en el uso de su lenguaje por las cargas simbólicas que atribuyen a su objeto de disputa, lo cual influye en su radicalidad y beligerancia.

Es necesario mencionar que la posición de los Shuar no es única ni homogénea, sino que, por el contrario, es altamente contradictoria y conflictiva. Para las comunidades Shuar que se oponen al proyecto megaminero, la lucha es por la defensa de sus tierras ancestrales; no es por reivindicaciones económico-personales ni reajustes, es por la defensa de la Cordillera del Cónдор, por sus derechos colectivos, por el agua y

la naturaleza. El objeto de disputa tiene una fuerte relevancia cultural, simbólica y una ancestralidad histórica: son territorios que les han pertenecido por siglos, sus ancestros habitaron esas tierras y derramaron sangre en los conflictos fronterizos con el Perú.

Estas demarcaciones simbólicas y culturales del objeto de disputa para los actores Shuar está acompañada por una fuerte problematización y crítica al discurso y narrativa de desarrollo publicitado por la empresa minera Ecuacorriente, así como por el gobierno progresista de Correa en su periodo presidencial.

Estas orientaciones y resignificaciones, pero básicamente estrategias en función de lo que estaría en juego, se superponen con todas las experiencias de las comunidades indígenas que han vivido el proceso petrolero desde la década de los setenta en Ecuador, y les permiten autoidentificarse como un sector de la sociedad excluido y marginado de un proyecto de carácter histórico de desarrollo y progreso:

Las empresas trasnacionales están llegando acá. Tenemos experiencia para decir: la experiencia petrolera en el norte del Lago Agrio, donde están los compañeros Sequoyas, Guaos, Cofanes. A ellos los explotaron por 40 años y no habido ese desarrollo que dijeron, que se va acabar la pobreza, va a haber economía. Más bien aumentaron en un 80% la pobreza. Eso engaña al mundo” (Territorio y autonomía. Domingo Ankuash, una voz del pueblo Shuar. <http://vimeo.com/74279604>).

Esto le otorga al objeto de disputa unos marcos de orientación más complejos, pues se busca la aceptación de sectores más amplios y la apertura de un debate social en la escena pública. Estos marcos están anclados en una crítica al modelo de desarrollo, lo cual, a la vez, permite articulaciones con otros sectores que están en la línea de la crítica al modelo de desarrollo anterior al gobierno de Correa, pero continuado por este con proyectos extractivos.

Lo anterior evidencia la identificación y construcción de una problemática en donde lo que estaría en juego adquiere significados más amplios, diversos y complejos, y donde las interacciones, los préstamos cognitivos y contactos con otros sectores ayudan a complejizar los elementos en juego y disputa. Esto no implica que en el sector Shuar exista un acuerdo sobre el proyecto Cóndor Mirador, ni mucho menos pensar en la existencia de consensos en los significados y la importancia atribuida y construida en torno a lo que estaría en juego, por el contrario este actor en el conflicto se caracteriza por sus posiciones contradictorias, difusas e igualmente pragmáticas.

Los sectores Shuar que se han estado organizando y resistiendo al proyecto de gran minería metálica en la Cordillera del Cóndor han experimentado una serie de procesos de colonización ejercidos por sectores mestizos, por el Estado y por compañías multinacionales. Estos procesos, al igual que la (re)significación han generado procesos de *apropiaciones colectivas* que han permitido la formación de *identidades colectivas* esta última, caracterizada por construir un “otro”, una exterioridad que es definida como un antagonista que amenaza la existencia de un “nosotros” (Mouffe, 2007, p.23). Estos dos elementos han permitido también una mayor capacidad de desafiar y crear vínculos organizativos en función de ser usados en la contienda. Sin embargo, la construcción y definición de esta exterioridad, este antagonismo, así como de las apropiaciones colectivas, no logró permear e influir de forma relevante en sectores y organizaciones que igualmente han sido notables en el conflicto y la contienda política: los sectores Shuar no consiguieron articularse con otros actores y organizaciones que también ejercían oposición al proyecto ni con amplios sectores de la población.

Por su parte, para los sectores campesinos y mestizos que se han opuesto al proyecto de minería a gran escala, lo que está en juego es el territorio como forma de subsistencia, el derecho al trabajo y la defensa de los derechos comunes, el agua y la biodiversidad de la Cordillera del Cóndor, así como de una identidad histórica construida por la participación en los conflictos con el Perú.

Estos marcos de orientaciones colectivas de los sectores mestizos y campesinos están igualmente obedeciendo a estrategias de disputas de sectores también en oposición por el control del lenguaje que se debe usar en la lucha y que permita aglutinar a otros sectores locales y regionales, pero también disputarle al gobierno central y a la compañía minera el significado del territorio.

Por otra parte, existe un factor que podría explicar la dificultad en establecer si el actor campesino-mestizo construyó una identidad colectiva antagónica, como en el caso de los Shuar. En primer lugar, esta población es producto de una migración de no más de treinta años, es decir, gran parte de los pobladores de los cantones del Pangui, Gualaquiza y Guismi provienen de migraciones principalmente de la sierra norte y central del Ecuador. Esto produjo formas de arraigo y una significación distinta para las poblaciones campesinas y mestizas, pues su relación con la tierra y el territorio está más atravesada por su carácter económico y de subsistencia material, lo que no implica que esta relación sea menos relevante o que le reste radicalidad a este actor en lo que pretende defender y disputar.

Es necesario afirmar que el proceso de orientación del objeto de disputa se realiza desde dos lugares, dos experiencias articuladas entre sí. El primero tiene que ver con lo que Orellana (1999) denomina espacios de vida¹²; esto es, un conjunto de elementos materiales e inmateriales que

12. Ortiz (1999) plantea que, respecto a la naturaleza, el ser humano produce unas concepciones, valores, percepciones y una visión de esta y de sí mismo dentro de ella. Afirma, también, que esta es una construcción subjetiva que se produce y reproduce socialmente y alrededor de la cual se producen hábitos y prácticas respecto a la naturaleza. Orellana (1999) y Ortiz (1999) se refieren a los *espacios de vida* en términos de conjunto de elementos materiales y no materiales que entran en tensión o contradicción con los valores que otorga la economía de mercado. De este modo, al referirnos a espacios de vida se señala un conjunto amplio de recursos naturales que las comunidades locales producen y reproducen

son representados y contruidos colectivamente por los actores locales en disputa ante actores más poderosos, en este caso el Gobierno central y la empresa minera. Es relevante recalcar lo anterior porque, como muy bien lo señalaba Thompson (1971) en su estudio de la clase obrera inglesa de los siglos XVIII y XIX, la economía moral de la multitud entendida como mecanismo de regulación y modulación del comportamiento rebelde se construye desde una ética popular, desde los mismos sujetos agraviados y, en esta medida, se define lo que es aceptable e inaceptable, lo justo e injusto.

En este sentido, los marcos de orientación de los actores locales que se oponen al proyecto de megaminería se producen desde lo que Donati (citado en Rivas, 1998) denomina como el *mundo de la vida*, desde la memoria y la cultura. Estas no son orientaciones desinteresadas o que se dan en ausencia de una estrategia transgresiva sino que, por el contrario, responden a los intereses materiales y simbólicos de los propios actores y organizaciones que disputan ante el Gobierno central y la empresa; intereses que tienden a traducirse directamente en orientaciones para la acción (Tarrow, 1994). Son estrategias que buscan construir espacios de legitimidad de la lucha de actores locales que disputan el apoyo de otros sectores locales, regionales y nacionales. Lo que estaría en juego con esta primera dimensión serían condiciones materiales, inmateriales y simbólicas elaboradas y recreadas alrededor del territorio, que buscan situar a la empresa minera y al Gobierno como los causantes de afectar negativamente los espacios de vida de las comunidades y poblaciones locales (Ortiz, 1999; Orellana, 1999).

paralelamente o en tensión con el Estado y la economía de mercado y que algunas veces puede pasar por recursos simbólicos y no materiales, identidad o participación. Los espacios de vida hacen referencia al contenido que los actores locales le atribuyen a lo que estaría en juego desde los mundos ideológicos, culturales, sistemas de pensamiento, valores y precepciones diferentes, pero que se producen, crean y activan en la dinámica misma de la contienda política.

Esto se articula con la segunda dimensión, los *marcos de injusticia* (Gamson, 1992), atribuidos a las prácticas del Gobierno y de la compañía minera, definidas por el abuso de poder y la pérdida o ausencia de justicia en el conflicto, esto, acompañado de una disputa por el sentido, la comprensión y el papel del Estado en garantizar los derechos mínimos de los ciudadanos. Estos marcos de injusticia realizan una crítica a las formas en las que se muestra el desigual reparto del poder en una sociedad y la intervención del gobierno central y de la compañía minera para realizar unos objetivos específicos. Los marcos de injusticia, primero señalan unas prácticas, que afectan las dinámicas locales, sus formas de relacionarse y socializar, y en esa medida, identifica acciones de las autoridades, como referentes de abuso y violaciones, y segundo; permiten no solo establecer un diagnóstico de la realidad, sino además construir formas de manejo y transformación de la misma.

Este proceso es mediado por la otorgación de valores y juicios y la imputación moral a los agentes causantes de esta condición. En estas circunstancias, los actores y organizaciones locales, a pesar de identificar claramente los “agravios” y los causantes de estos, no niegan la existencia de posiciones ambiguas y contradictorias sobre los causantes de las injusticias, de los objetos de disputa, estrategias y las reacciones de los distintos sectores que conforman los actores locales-regionales y nacionales movilizadas.

Entre finales del 2007 y el 2009 se crean y recrean identidades sociales en torno al conflicto del proyecto Cóndor Mirador. En la primera fase se realiza un proceso de polarización de los sectores que inciden e intervienen en esta contienda y, como resultado de los mecanismos ya mencionados, se da un cambio de escala al pasar de lo local a lo regional y nacional, con distintas interacciones de los actores y cambios en lo que estaría en juego. Esto último transformaría las relaciones entre los reivindicadores del proyecto y lo que se estaba disputando.

Por otro lado, la crisis y apertura del sistema político mencionada anteriormente permitió que las demandas de un sector antiminerario nacio-

nal, que está emergiendo y busca consolidarse, adquirieran relevancia y resonancia social. Así, este amplio sector profundamente heterogéneo capitalizó esta crisis en el momento que se gestionaba la Asamblea Nacional Constituyente de 2007 y 2008.

Las redes de organizaciones y actores locales permitieron que confluyera en definiciones sobre la problemática, disputándole así al Gobierno central y las compañías multinacionales en distintas partes del Ecuador la posibilidad de influir en la Asamblea Nacional Constituyente. Además, convergen en una propuesta nacional llamada Mandato Minero, lo cual permitió aumentar el nivel de la contienda política, a la que se sumaron sectores institucionales como el Partido Pachakutic. Estas adhesiones estarían acompañadas, y en esto concuerdan los líderes, por el aumento de la represión, los juicios y la persecución judicial por parte del Gobierno, junto con una serie de campañas de desprestigio y deslegitimación hacia el movimiento y sus líderes.

Como resultado de la conflictividad presentada durante estos años, y focalizada en ciertos proyectos nacionales, además del respaldo que tuvo en un principio el Mandato Minero a nivel nacional en la Asamblea Nacional Constituyente, se logra suspender proyectos estratégicos para el Gobierno de Correa, entre estos el proyecto Mirador¹³.

Para este mismo tiempo se decide realizar el Encuentro de Pueblos por la Vida en Cuenca, Gualaquiza y Sigüig. Resultado de este evento, en el 2008 se conforma la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), que tuvo el carácter de ser un *mecanismo relacional* (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005); es decir, un espacio de confluencia que tuvo la capacidad, en un principio, de congregar a diversos grupos

13. En la Asamblea Nacional Constituyente se reconoció la lucha legítima de las miles de personas que defendieron sus derechos. Además, se reconoció que la justicia fue un instrumento de criminalización, por lo cual se archivaron estos procesos mediante una amnistía.

de individuos y colectivos indignados por la actuación del Gobierno en sus distintos niveles. La CNDVS, gracias a las interacciones, logró vincular a actores y grupos que antes estaban desvinculados pero que se encontraban dispuestos a aprovechar la oportunidad política abierta por la crisis del sistema político, y por el conflicto mismo, para expresar y canalizar un profundo descontento (McAdam, 1999; Brito Díaz, 2013).

La CNDVS, si bien se gestó como resultado del Encuentro de Pueblos por la Vida a finales del 2007 con el fin “articular la lucha, ganar legitimidad y poder frente el gobierno. (...) [Pero] sin definir previamente su forma organizativa interna y sin consensos mínimos sobre hacia dónde direccionar la unidad y sus estrategias” (Latorre y Santillana, 2009, p.15), se caracterizó por sus principios de centralismo democrático y fue fuertemente influenciada por la Coordinadora Campesina Popular, conocida por mantener un proyecto político a partir de una ideología fuertemente autonomista, anticapitalista, antiimperialista y de clase.

Este espacio organizativo y de confluencia, en el cual convergieron los distintos sectores locales y regionales que antes habían estado localizados al margen del debate público nacional, logró agregar y configurar distintos activistas y sectores con un amplio repertorio de acciones y apoyo social. Su estrategia principal fue identificar a las compañías mineras como “invasoras” y exigir la propiedad sobre “el agua, biodiversidad, bosques, petróleo, minas, gas y otros recursos naturales (...) no estamos dispuestos a seguir cualquier camino de desarrollo que el imperialismo quiera imponernos” (Moore y Velásquez, 2013, p.) Así, la CNDVS consiguió conformarse como un actor legítimo e incrementar su poder de negociación, dominando el lenguaje de lo que se disputaría en términos de soberanía y de decisiones sobre el uso del agua, el territorio y los recursos por parte de las comunidades y pueblos locales.

Sin embargo, su apoyo social y capacidad de articulación como mecanismo relacional fue limitado desde su origen mismo. Llegó un momento en que las demandas de la CNDVS no lograron recoger la experiencia

y lenguaje del movimiento indígena ni de las comunidades Shuar asentadas en la parte sur de Zamora Chinchipe. Esto es pertinente mencionarlo dado que el proceso de orientación y de sentido en la disputa debe estar fuertemente anclado con el entorno cultural y social. Así, el mecanismo relacional que en un principio logró amplio apoyo social en los distintos niveles, con una gran capacidad de desestabilizar y restarle legitimidad al Gobierno de Correa, fue rápidamente socavado por la falta de capacidad de conectar la CNDVS con el lenguaje y las experiencias comunales más locales y por disputas internas de los líderes por el protagonismo y la hegemonía al interior de la estructura organizativa. La relevancia que alcanzó la CNDVS fue rápidamente quebrada desde su interior, lo cual se juntó con las estrategias del Gobierno central de desprestigio, deslegitimación y persecución judicial a sus líderes.

El carácter ideológico-político de la CNDVS, marcadamente autonomista, antiimperialista y anticapitalista, y con una estructura organizativa centralista, es resultado principalmente del carácter ideológico del que fue permeada y de que logró superponerse a estrategias y propuestas de gobierno y desarrollo alternativos “en un formato distinto al de los partidos políticos y en un contexto de debilidad y de crisis de las organizaciones sociales” (Latorre y Santillana, 2009, p.17). La CNDVS entendida como mecanismo relacional del que se pudo haber fortalecido y aprovechado el movimiento antiminerero no tuvo mayor conexión con organizaciones y actores locales, además de no tener posiciones claras respecto a la pequeña minería y la minería estatal. Esta característica dificultó construir un discurso unificado, así como estrategias claras que le permitieran disputarle al Gobierno de Correa la capacidad de interpelación y apoyo de amplios sectores de la sociedad.

El carácter amplio de la CNDVS entendida como mecanismo relacional se vio afectado, ya que ésta debió tener un discurso más heterogéneo que permitiera ejercicios de reconocimiento más amplios. Además, en plena época de disputa electoral, las promesas del candidato Correa (prohibición de la minería a gran escala, no actividades extractivas en

nacimientos de agua, áreas protegidas y la incorporación al gobierno de líderes comprometidos con las luchas sociales) ocasionaron una disminución de la radicalidad de la CNDVS. Al mismo tiempo, algunas organizaciones iniciaron procesos de diálogo con el Gobierno, lo cual se sumó a disputas internas, acompañadas por medidas de hecho, causadas por sectores y organizaciones que buscaban mantener la radicalidad y una ruptura con el sistema. Todo esto conllevaría a una fragmentación de la CNDVS, que para finales del 2008 decidió mantener su radicalidad, lo cual condujo a que muchas organizaciones de base se desvincularan y crearan plataformas alternativas (Latorre y Santillana, 2009).

En esta segunda fase de la contienda política, el contexto político y socioeconómico le otorgaron un gran sentido a lo que estaba en juego para los dos actores principales: Gobierno central y sector antimine-ro. Anteriormente se mencionó que temas como la crisis del proyecto neoliberal, el papel del Estado en el desarrollo económico y social y la forma como estaría inserto Ecuador en el sistema económico mundial adquirieron tensiones y dimensiones fuertes en el debate político. En este contexto, lo que estaría en juego para actores recientemente conformados, como el sector antimine-ro, es la soberanía: el movimiento antimine-ro le estaría disputando al Gobierno central y a la compañía minera el derecho de las comunidades y pueblos a decidir sobre el agua, la tierra y los bosques. Para otro sector en el nivel nacional como el Partido Pachakutic, un sector de la CONAIE, y un gran sector del partido Alianza País, estaría en juego la posibilidad de crear una industria minera nacional y estatal.

Por su parte, para el Gobierno central, en esta segunda fase de la contienda política, estaría en juego la soberanía del Estado y, de este modo, el incremento de la participación en los beneficios producto de la explotación de bienes de la naturaleza y la posibilidad de financiar proyectos de inversión social. En otras palabras, para el Gobierno central estaba en juego la posibilidad de mantener y reproducir un proyecto político que entre el 2007 y el 2009 buscaba consolidarse y legitimarse a par-

tir de un ‘giro radical’ de inversión social, principalmente en salud y educación. De esta forma, el contexto político y socioeconómico que se cristalizaría en el 2009, le otorgaría forma y sentido en lo que estaba jugando el Gobierno central.

Orientaciones gubernamentales de la Revolución Ciudadana

En la parte anterior se resaltó la importancia de comprender la creación de marcos de orientación en estrategias de los actores y organizaciones locales y nacionales, pero, para comprender la dinámica del conflicto, es necesario observar también el proceso de orientación de otro actor: el Gobierno de Correa. El objetivo central de este último es posicionar la minería a gran escala en el debate público con ciertos enunciados y conceptos claves que delimitan y establecen la relación de ésta con determinados efectos y objetivos políticos. La importancia de los marcos de acción colectiva radica en que estos hacen parte de los elementos explicativos de la contienda política, por eso es necesario analizarlos también en los actores institucionales y, principalmente, del Gobierno y las compañías mineras que se reconstruyen constantemente igualmente que actores sociales y políticos su lenguaje y su discurso, es decir, sus estrategias y formas de orientación con fines políticos y persuasivos (Goffman, 1974).

Las orientaciones gubernamentales se apoyan en un conjunto múltiple de *tecnologías de significación*¹⁴ (Foucault, 1991). Estas últimas hacen parte de un conjunto de mecanismos de poder, que no solo señalan características negativas, “el poder produce, produce lo real, produce campos de objetos y rituales de verdad” (Foucault, 1977, p.15), y que fundamentalmente buscan crear o mantener condiciones de posibilidad

14- Foucault (1979 y 2000) concibe el poder en una relación que se ejerce de forma no igualitaria. Además, toda sociedad se concibe en un complejo de relaciones de poder que atraviesa instituciones y aparatos del Estado, pero sin agotarse en estos, pues recorre distintos espacios sociales.

de proyectos de gobierno (Foucault, 2006). Con esto se intenta señalar que los mecanismos de poder son unas herramientas fundamentales y estrategias en un contexto de disputa y contienda política, como serían este tipo de proyectos. Sujete una parte de la población y acepten los proyectos mineros de gran escala, como el Proyecto Cóndor Mirado, de tal modo que logren ser aceptados por una amplia parte de la población.

Por un lado, las estrategias del Gobierno están dirigidas a mantener y sujetar las conductas de un amplio sector de la población que debe interpretar los proyectos extractivos como razonables, propios y necesarios a través de su vinculación con el buen vivir, el progreso y el desarrollo, es decir, ligando eficaz y molecularmente los proyectos extractivos, en este caso de minería a gran escala, con la vida social. De tal forma, se construye un modo de vida, una forma concreta de estar en el mundo, posibilitada y en función de una serie de políticas y de la racionalidad extractiva. Esto tiene que pasar no solo por una serie de proyectos ideológicos, sino también a través y sobre la producción de una serie de deseos, aspiraciones, creencias y sentidos sobre el mundo material y las relaciones humanas (Castro-Gómez, 2010).

Los procesos de orientación gubernamental e institucional es necesario situarlos como parte de estrategias en las que opera un complejo entramado de poder sobre proyectos extractivos a gran escala. Estos marcos gubernamentales e institucionales buscan fomentar y favorecer el mantenimiento de ciertas relaciones asimétricas de poder político y económico, además de descalificar a sectores y organizaciones que se oponen abiertamente y que se movilizan contra los proyectos de minería metálica a gran escala.

Al ser cuestionado sobre la contradicción de su Gobierno respecto a la gran minería en el Ecuador, Rafael Correa responde:

En nuestro gobierno hemos revertido 4.000 concesiones mineras, había casi 5.000. Las otras que no hemos podido revertir es porque cumplían con

la ley (...). Hemos revertido cerca de cuatro millones de hectáreas. (...) La minería es inevitable (...), nosotros no hemos dado ni una sola concesión minera de las que son conflictivas. Ya estaban ahí, tenemos que regularla. (...) Yo les pido a los ciudadanos, a los pueblos ancestrales, confíen en el Presidente. A mí me interesan un bledo las trasnacionales. (...) Seamos inteligentes, utilicemos las trasnacionales, ni siquiera como socias, como sirvientes, (...). Aprendamos de ellas (...) y en ocho o diez años ojalá nosotros podamos manejar la gran mayoría de esos yacimientos. (Telesur, 22 de octubre de 2009)

Este primer extracto me permite resaltar dos elementos del manejo del objeto de disputa política. En cuanto a los proyectos mineros a gran escala el gobierno de Correa establece una estrategia de ruptura, un antes y un después: nuestro gobierno hace esto, esto ya estaba, estamos haciendo historia, por primera vez en el país, etcétera. Esta es una estrategia que se caracteriza por transformar y distorsionar el pasado (Cuvi, 2013). La otra estrategia de orientación de Correa es la delimitación de un proyecto de extracción como algo inevitable, más allá de toda fuerza, es decir, lo ubica en un espacio y tiempo definido más allá de toda capacidad y decisión humana “la minería es inevitable”. Esta es una forma de vincular los proyectos extractivos con una estrategia de naturalización de estos.

Por otro lado, Unda (2013) afirma que el correísmo surge ante el fracaso del modelo neoliberal y el debilitamiento de las organizaciones populares. Así, la estrategia de orientación de Correa se apoya en el fracaso del proyecto neoliberal, pero sin quedarse en este; se apoya en el vacío creado a partir de dicho fracaso (re)significando uno de los elementos centrales: las compañías multinacionales.

La crisis del modelo neoliberal genera un vacío alrededor del papel del Estado en la sociedad, de la dirección de la economía y de los fundamentos éticos de la democracia. Correa emerge apoyándose en un proyecto de refundación de la República sin partidos y en una fuerte crítica

al modelo neoliberal¹⁵. Así, recrea el sentido de proyectos mineros a gran escala a través de la captura de un concepto que ha sido señalado de causar injusticia y pobreza en los proyectos políticos neoliberales de la Latinoamérica de los ochenta y noventa, y que las izquierdas han criticado y cuestionado desde distintos puntos. De este modo, el proceso de orientación del Gobierno se caracteriza por capturar, resituar y resignificar las experiencias negativas del Ecuador¹⁶ en el ámbito de las políticas extractivas, entre las cuales se puede mencionar los efectos de las petroleras sobre las poblaciones y el medio ambiente. Correa realiza un ejercicio de resignificación de la importancia y de los beneficios que pueda brindar la minería a gran escala para el Ecuador redefiniendo el papel de las transnacionales y el capital extranjero como agentes de desarrollo o con la capacidad de mejorar las condiciones sociales, pues los desplaza de esta función para dársela al Estado en su papel redistributivo y orientador de la economía.

Es de relevancia ver el manejo del objeto de disputa por parte del gobierno de Correa (extracción/no extracción). En un contexto nacional y

15- Entre 2009 y 2013 los principios orientadores del proyecto político de Correa fueron el regreso del Estado a su papel redistribuidor y orientador de la economía, que se ha definido como igualitarismo republicano, y un cambio del modelo de acumulación. Correa ha mantenido un lenguaje constante de cambios en la sociedad y la economía, principalmente respecto al peso y el papel del Estado (Ospina Peralta, 2013).

16- Ecuador desde 1970 se ha beneficiado de regalías y pagos de impuestos por la extracción de crudo y procesamiento en hidrocarburos, lo cual ha contribuido al sostenimiento económico del país con proyectos de inversión social e infraestructura física, pero la capacidad económica de la explotación del petróleo para crear y mantener una burocracia estatal y proyectos de inversión han ocultado efectos importantes colaterales de la explotación petrolera respecto al ser humano, como el desplazamiento de los pueblos, la represión militar y la contaminación al agua y suelo, con sus consecuentes efectos negativos a la salud (Gordillo, R. 2003). Con relación a esto, el caso de Texaco y los daños a la Amazonia ecuatoriana comenzaron a salir a luz en el gobierno de Correa por un importante uso mediático que le sirvió de campaña electoral.

continental, en donde las multinacionales han sufrido un fuerte proceso de crítica social y política tanto de sectores académicos como de movimientos y sectores sociales y populares, y bajo este contexto, se recalca la orientación gubernamental captura el enunciado ‘transnacional’ y su papel en el desarrollo económico y social regional y nacional, a partir de la inversión privada y de grandes capitales en proyectos que impliquen efectos ambientales y sociales de gran impacto. De esta forma, busca ubicarse e identificarse Correa en el lado legítimo del cambio, es decir, en el del manejo adecuado de los recursos naturales y la intención de poner la casa en orden a través de la mayor participación e intervención del Estado. Ésta, sería una estrategia que busca generar aceptabilidad social o, por lo menos, gran expectativa no solo entre la población en general, sino también dentro de las organizaciones sociales y amplios sectores de la izquierda en el Ecuador.

En una sabatina sobre la Reforma a la ley de minas e hidrocarburos el presidente Correa afirma lo siguiente: “Esta es la forma inteligente de tratar nuestros recursos naturales no renovables. No es no al petróleo, no a la minería, no.; Sí al petróleo, sí a la minería, con responsabilidad ambiental y social y que la plata se quede aquí donde está el proyecto. Y eso es lo que hace la reforma a la ley” (Telesur, 8 de octubre de 2010). Acá es fundamental observar la relación entre la “forma inteligente” para manejar adecuadamente los recursos naturales, lo cual recalca la existencia de un antes y un después, la distorsión del pasado y la importancia de realizar “manejos inteligentes” y con responsabilidad social y ambiental que produzcan beneficios económicos.

Estamos invirtiendo 84 millones, con 84 millones todo lo que ha avanzado Morona imagínense con el doble de eso solo por minería, a no ser tontos compañeros. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, que la minería sea con responsabilidad social y ambiental. Primero eliminamos la pobreza en Morona (...), que ni un dólar salga hasta que la pobreza en Morona no sea eliminada, pero no llegar a infantilismo, no a la minería y murámonos de hambre (...). Vamos a pasar a una nueva era, la era de la

minería responsable para salir de la pobreza, de la miseria. Aquí están las primeras pepas de oro extraídas con responsabilidad social y ambiental. Cuando quieran hacemos un tour por Morona y Esmeraldas para que vean lo contentas que están las personas y todo lo que estamos haciendo, para que vean la realidad compañeros Shuars (...). Esto es oro, nos va sacar de la pobreza. Esto es un asunto técnico no político (...), sacar de la pobreza a los afro, a los Shuar, sacar de la pobreza al Ecuador. Morona puede tener la segunda mina de cobre más grande del mundo, eso nos saca de la pobreza. (Correa, 2011).

En este extracto de la sabatina del 11 de diciembre del 2011 se puede comprender lo que estaría en juego para el gobierno de Correa y su estrategia de vincular la minería con el progreso. Es decir, según Correa, antes Ecuador estaba ubicado en un estadio de subdesarrollo, pobreza y miseria que solo es posible transformar a través de la explotación responsable y limpia de la minería que está emprendiendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Así, presenta las primeras pepas de oro como medio para salir de la pobreza y la miseria, uno de los fines de su Gobierno. De esta forma, la política extractiva y los proyectos estratégicos de recursos naturales, en este caso el proyecto Mirador, son justificados por los recursos extraídos que permitirán financiar proyectos de desarrollo y subsidios a los sectores menos favorecidos.

En el extracto citado, Correa utiliza un elemento estratégico fundamental: al decir “esto es un asunto técnico, no político” está encubriendo decisiones políticas con el uso de las garantías que ofrece la tecnología actual. De esta forma, desincorpora el asunto, lo vacía de cualquier conflicto político e interés para ubicarlo en lo técnico, en las garantías que pueda ofrecer la tecnología al servicio de un proyecto desinteresado de toda necesidad gubernamental.

Estos procesos y formas de orientación gubernamental desde las *tecnologías de significación* construyen ciertas zonas definidas históricamente como marginales y pobres en función de crear las condiciones de posi-

bilidad locales de los proyectos mineros. Con esto quiero decir que la estrategia gubernamental de orientación del gobierno de Correa realiza procesos de *capitalización de experiencias* (Brito Díaz, 2013): experiencias como la miseria, la pobreza y la marginalidad se pueden transformar con el aprovechamiento adecuado y responsable social y ambientalmente de la explotación de recursos mineros, y, claro está, con el manejo para ubicarla como el único camino real y posible para lograrlo.

Por último, cabe decir que la ambigüedad del discurso de izquierda de Correa, la forma de apuntalar un marketing político y unas condiciones de posibilidad de la política minera que captura y redefine las transnacionales, junto con otros nociones como *izquierda*, *revolución*, *Sumak Kawsayy derechos de la naturaleza* le permitieron conseguir un gran apoyo social, pero vaciando de todo contenido y sustancia estos conceptos producidos desde las organizaciones populares.

Conclusiones

El proceso organizativo en el caso del proyecto Cóndor Mirador se definió básicamente como exógeno; es decir, no tuvo éxito desde la zona directamente afectada, sino que fue centralmente externo, pues no logró consolidarse ni establecer raíces profundas en la zona directamente afectada. Igualmente, son relevantes las divisiones entre los actores locales, ya que las diferencias históricas sobre el control y las formas de apropiación de terrenos han sido causantes de las dificultades de diversos sectores locales para aglutinarse alrededor de significaciones, formas y estrategias de luchas comunes.

En este caso, fueron importantes las redes creadas con otras experiencias mineras a nivel nacional e internacional. Estas redes permitieron aumentar interacciones con otros sectores, despertar formas de solidaridad y crear mecanismos cognitivos que permitieron transformar las valoraciones colectivas iniciales, sin mayor capacidad de organización, en unas dirigidas a procesos de movilización. El papel de estos sectores

externos fue fundamental para transformar y reinterpretar lo injusto de la situación y los causantes de estas injusticias e intervenir en la codificación de marcos de un problema social a una problemática con la atribución de otros significados más amplios que se debían resolver a través de la organización y movilización colectiva.

Así mismo, las estrategias de orientar lo que estaría en juego en la primera fase de la contienda se producen desde las experiencias de cada sector, siendo así transformada en el mismo proceso de contienda la forma de orientar el objeto a disputar en la relación con actores gubernamentales e institucionales, pero además en las mismas relaciones con sectores aliados y estratégicos.

Recogiendo lo dicho, el proceso de orientación de las organizaciones y actores locales que se oponen a proyectos de minería a gran escala, así como del lado del Gobierno central, entre más cercanos logre producir sentidos, símbolos y respuestas a las necesidades económicas y materiales de la población (mejoras salariales, infraestructura vial, salud, educación), más permite producir conductas y sentidos dirigidos a desequilibrar, mantener o crear unas relaciones asimétricas de poder en la contienda.

Es de resaltar la influencia y el papel del contexto político y socioeconómico sobre la producción y construcción de orientaciones colectivas de las organizaciones y sectores colectivos movilizados que defienden sus territorios y sus formas de vida, así como de las orientaciones gubernamentales. Ambas son transformadas en función no solo de buscar espacios de legitimidad y apoyo social y político, sino del momento y del contexto político, y socioeconómico, nacional e internacional. Según se ha tratado de demostrar, la aceptabilidad de los proyectos mineros a gran escala en poblaciones locales directamente afectadas por estos no se debe a que se haya logrado consolidar un poder 'total' alrededor o sobre sectores movilizados. Se explica en gran parte, porque se producen unas condiciones de posibilidad, y se potencian unas ya existentes,

con el objetivo que sean acogidas por la gran mayoría o, al menos, por una parte considerable de la población. Estas estrategias son complementadas con medidas disciplinarias sobre sectores movilizados y críticos con estos proyectos mineros, mas allá, con el modelo de desarrollo económico que postula el programa de la revolución ciudadana del gobierno actual en Ecuador.

Bibliografía

- Acosta, A., y Sacher, W. (2012). *La minería a gran escala en Ecuador: análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Acosta, A. (2013). El correísmo: un nuevo modelo de dominación burguesa. En F. Álvarez González, et al. *Correísmo al desnudo* (pp. 9-21). Quito: Montecristi Vive..
- Alimonda, H. (2003). *Ecología política: naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO.
- Alimonda, H. (2011). *La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO.
- Brito Díaz, J. M. (Julio de 2013). El impacto político de la contienda ecologista en Tenerife: la experiencia de la Coordinadora Ecologista Popular de El Rincón (1984-1992). En H. Cairo (Presidencia) *Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología*. Ponencia llevada a cabo en el XI Congreso Español de Sociología. Federación Española de Sociología y Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
- Castro-Gómez, S. (2010). *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Santo Tomas.

- Correa, R. (2011). Enlace ciudadano 13 de Noviembre de 2011. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ttbz6EyFQ7M>
- Cuvi, J. (2013). Refundación y religiosidad: guías para entender el correísmo. En: F. González et al. *Correísmo al desnudo* (pp. 22-35). Quito: Montecristi Vive.
- Delgado Ramos, G.C. (2010). ¿Por qué es importante la ecología política? *Nueva Sociedad*, (244), 47-60.
- Dahrendorf, R. (1962). *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp.
- Foucault, M. (1977). *Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber*. México: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1991). *El sujeto y el poder*. Bogotá: Carpe Diem Ediciones.
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio y población*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gamson, W. y Meyer, D. (1999). Marcos interpretativos de la oportunidad política. En D. McAdam, J.D. McCarthy y M.N. Zald (Eds.), *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas* (pp. 389-412).. Madrid: Istmo.
- Garbay Mancheno, S. (2011). *Desarrollo y Minería en el Ecuador: Un análisis del derecho de participación en el Proyecto Mirador* (tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
- Gerheards, J. (1993). Framing Dimensions and Framing Strategies: Contrasting Ideal- and Real Type Frames. *Social Science Information* 34(2), 225-248.
- Gofmann, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gordillo, R. (2003). *¿El oro del diablo? Ecuador: historia del petróleo*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Kunh, R. (2011). *No todo lo que brilla es oro. Conflictos socio ambientales alrededor de dos proyectos de minería a gran escala en el Ecuador* (tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

- Klandermans, P. B. (1998). La necesidad de un estudio longitudinal de la participación en movimientos sociales. En B. Tejerina y P. Ibarra (Eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 271-290). Barcelona: Trotta Editores..
- Lander, E. (2011). El Estado en los actuales procesos de cambio en América Latina. Proyectos complementarios/divergentes en sociedades heterogéneas. En M. Lang y D. Mokrani (Eds.) *Más allá del Desarrollo* (pp. 121-143). Quito: Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana y Fundación Rosa Luxemburgo.
- Latorre S., y Santillana A. (2009). Capitalismo estatal y convergencias ciudadanas. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (34), 13-18.
- Lefwich, A. (1987). *¿Qué es la política?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, Esperanza (2013). “La políticas minero/petroleras de la revolución ciudadana: incumplimiento, desvío, avocamiento y coacción”. En: *Correísmo al desnudo*. Fredy Álvarez González [et al.] (pp.173-179) Quito: Montecristi Vive
- McAdam, D., Tarrow, S., y Tilly, Ch. (2007). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Editorial Hacer.
- Moore, J., y Velásquez, T. (2013). La soberanía hipotecada: los movimientos antimineros, el Estado y las empresas mineras multinacionales bajo el Socialismo del Siglo XXI. En A. Bebbington (Ed.), *Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina* (pp. 185-218). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, CEPES, Propuesta Ciudadana.
- Mouffe, Ch. (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
- Orellana H., R. (1999). Aproximaciones a un marco teórico para la comprensión y el manejo de los conflictos socioambientales. En P. Ortiz-T (Ed.). *Comunidades y conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina* (pp. 88-109). Quito: Ediciones UPS, Abya Yala.
- Ortiz, P. (1999). Apuntes teórico-conceptuales para el diseño de una propuesta metodológica de manejo de conflictos socioambientales a través de forestería comunitaria”. En P. Ortiz-T (Ed.). *Comunidades y conflictos socioam-*

bientales: experiencias y desafíos en América Latina (pp. 7-32). Quito. Ediciones UPS, Abya Yala.

Ortiz Lemos, A. (2013). *La sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolución ciudadana*. Quito: FLACSO Sede Ecuador.

Ospina Peral, P. (2013). “Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo”. En E. Lander, C. Arze, J. Gómez, P. Ospina, y V. Álvarez. *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina* (pp. Quito: Instituto de Estudios Ecuatoriano, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Centro Internacional Miranda.

Pluie films y Aldeah (productores). (2013). *Territorio y autonomía. Domingo Ankuash, una voz del pueblo Shuar*. Recuperado de <http://vimeo.com/74279604>

Ramírez Gallegos, F. (2007). Cambio político, fricción institucional y ascenso de nuevas ideas. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (28), 23-28.

Ramírez Gallegos, F. (2010). Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010). *OSAL. Observatorio Social de América Latina*, (28), 17-47.

Rivas, A. (1998). El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En B. Tejerina, y P. Ibarra (Eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural* (pp.181-218). Barcelona: Trotta Editores.

Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

Telesur (22 de octubre de 2009). Rafael Correa en entrevista sobre la minería en Ecuador. Recuperado de http://www.dailymotion.com/video/xaw1ra_rafael-correa-en-entrevista-sobre-l_news

Telesur (8 de octubre de 2010). Correa: sí al petróleo y sí a la minería Recuperado de http://www.dailymotion.com/video/xe7wa4_correa-si-al-petroleo-y-si-a-lamin_news

Thompson, E.P. (1971). *Costumbres en común*. Barcelona: Crítica-Grijalbo.

Toro Pérez, C. (2012). Introducción. Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales. En C. Toro Pérez, J. Fierro, S. Coronado, y T. Roa Avendaño (Eds.), *Minería, territorio y conflicto en Colombia* (pp. 17-34). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Unda, M. (2013). Modernización del capitalismo y reforma de Estado. En F. Álvarez González et al. *Correísmo al desnudo* (pp. 9-21). Quito: Montecristi Vive.

Wolin, S. (1974). *Política y perspectiva: continuidad y cambio en el pensamiento político occidental*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.